

de una confesión religiosa y de su ordenamiento jurídico. Tal hecho no puede dejar indiferentes a las iglesias cristianas, y si las soluciones propuestas por el autor para la Iglesia ortodoxa no serían aceptables para la Católica, no es menos cierto que el problema es general y a todos debe preocupar.

El último artículo de esta parte III, se debe a J. G. GERHARTZ, y lleva por título «La indisolubilidad del matrimonio y su disolución por la iglesia en la problemática actual». Y puesto que lo preceden otros dos sobre el mismo tema de las Iglesias protestante y ortodoxa, es evidente que se trata aquí de completar esta visión de conjunto sobre la doctrina de las confesiones cristianas, aportando la correspondiente a la Iglesia católica. En este sentido, era de esperar —como ha sido el caso de los dos autores precedentes— una exposición objetiva de datos teológicos y jurídicos; nos sorprende en cambio hallar un trabajo de opinión, que no ofrece tanto un estado de la cuestión cuando las ideas propias de un autor, y que además repite varios apartados de resumen histórico, olvidando que esa tarea ya la asumieron los tres colaboradores que redactan la parte II del libro.

Mientras GERHARTZ se emplea en presentar este resumen histórico, se mantiene substancialmente en la línea de una información y presentación objetivas de datos que resultan conocidos. Es por esta vía como llega a formular la tesis de que la Iglesia —a tenor de la doctrina que ha llegado a nosotros— puede disolver todos los matrimonios salvo el matrimonio consumado de dos bautizados. Lo cual es obviamente correcto. Se pregunta entonces el autor —y a ello dedica el relativamente extenso apartado último de su trabajo— por el «fundamento de la doctrina de la indisolubilidad jurídica absoluta del matrimonio sacramental consumado». Y en estas páginas, que titula «Ensayo de comprensión», lo que GERHARTZ lleva a cabo es un ensayo de desmontar los argumentos que fundamentan aquella doctrina. Refutados cada uno de ellos, no encuentra el autor otro argumento válido para apoyar la doctrina de la indisolubilidad absoluta que el bien común. Y cómo —según expresamente señala— éste es un concepto temporal y relativo, no sólo acepta sino que sugiere un cambio en la doctrina de la indisolubilidad, en orden a resolver situaciones de hecho —segundas nupcias inválidas tras la ruptura de facto del matrimonio anterior— que son hoy frecuentes y no pueden resolverse en el marco de la indisolubilidad del matrimonio sacramental consumado.

Este planteamiento adolece de varios defectos: 1) Una utilización muy parcial de la bibliografía, y una notable audacia, llevan al autor a decidir que sólo hay cinco argumentos que puedan servir de apoyo a la doctrina de la Iglesia sobre la indisolubilidad absoluta; 2) la refutación de los cuatro primeros es superficial, y está muy lejos de abarcar todas las posibilidades de análisis que esos posibles fundamentos ofrecen; 3) la aceptación del quinto —el bien común—, y la consideración de su carácter relativo, están realizadas sin la

más mínima referencia al carácter sobrenatural de la Iglesia, del sacramento y de la personal vocación de cada hombre a la salvación a través del sacrificio redentor de la Cruz. En este sentido, el matrimonio no ha sido entendido rectamente por el autor, que se suma a la serie de quienes, proclamándose pastoralistas antes que juristas, «jurifican» cuanto tocan al vaciarlo de proyección salvífica, como si desconocieran la participación personal de cada hombre en el misterio de la Pasión.

Concluye el volumen con unas reflexiones del Prof. GAUDEMET, «A modo de conclusión». Resume ante todo el ilustre maestro las aportaciones de cada autor al coloquio que —en forma de artículos— queda recogido en el volumen. Tal resumen logra ser meramente literal, absolutamente objetivo. Y una vez expuesto, señala GAUDEMET que «por encima de las divergencias, a veces graves, que todavía se mantienen en la actualidad, parece que es posible sacar tres ideas esenciales de estas conversaciones» (p. 251). La primera, que el matrimonio se presenta a la vez como un hecho social y una realidad humana. La segunda, que el matrimonio no ha sido nunca ignorado en ninguna religión, y que tanto la historia como el derecho comparado advierten a cada paso de que esta sublimación o sacralidad, al sustraer la naturaleza del matrimonio a la libertad humana, presenta algunos peligros, que también la historia y el derecho han intentado resolver. La tercera, que el matrimonio interesa a la Iglesia y al Estado, de donde han surgido antagonismos y presiones encontradas.

Finalmente, se ofrece, preparada por METZ y SCHLICK, una Bibliografía internacional 1970-72 sobre el tema general del volumen.

ALBERTO DE LA HERA

DERECHO CONCORDATARIO

PEDRO J. FRIAS, *El Acuerdo entre la Santa Sede y la República Argentina*, 1 vol. de 78 págs. Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba (Argentina), 1975.

El autor, a quien correspondió —como embajador de su país en el Vaticano— proceder al canje de los instrumentos de ratificación del Acuerdo entre la Santa Sede y la República Argentina de 10-X-1966, ha recogido en este breve volumen cuanto se requiere para informar al lector acerca de los precedentes, historia y contenido de dicho tratado.

A tal efecto, reuniendo algunos escritos suyos ya aparecidos en forma de artículos en varias publicaciones, y completando lo necesario para no dejar descuidado ningún otro punto de interés, Pedro J. Frías ha

sistematizado el tema en nueve apartados: I. Las relaciones del Estado y la Iglesia en la Argentina; II. El patronato de la Constitución; III. Los antecedentes inmediatos del Acuerdo; IV. El Acuerdo entre la Santa Sede y la Argentina. Texto y comentario; V. Materias Mixtas: La hipótesis de reconocimiento de efectos civiles al matrimonio religioso; VI. Patronato y reforma de la Constitución; VII. Iglesia y Estado: las relaciones pactadas después del Concilio Vaticano II; VIII. Concordatos y Acuerdos vigentes; IX. Bibliografía argentina.

La actual República argentina, mientras formó parte de la Monarquía española, se rigió por las Leyes de Indias en cuanto a su régimen eclesiástico. En ejercicio del Derecho de Patronato, regulado por tales Leyes con base en precedentes concesiones pontificias, correspondía a los Reyes de España la presentación de los candidatos a los beneficios consistoriales, y concretamente a las sedes episcopales.

Al producirse la independencia, los gobiernos de la nueva república ocuparon el lugar antes desempeñado por la Corona y el Consejo de Indias, es decir, continuaron ejerciendo un patronato que es muy dudoso que les correspondiese de derecho, pero que llenó de facto lo que hubiese sido una laguna en la organización y vida de la Iglesia en la Argentina.

El tema de los nombramientos para las sedes episcopales fue más tarde resuelto de modo unilateral en la Constitución de 1853; a tenor de la misma, el gobierno de la nación presentaría a los obispos residentes y a quienes sin serlo hayan de ejercer tal función. Otros preceptos constitucionales establecían el pase para los decretos de los concilios, las bulas, breves y rescriptos del Sumo Pontífice, y reservaban al Congreso la admisión de nuevas órdenes religiosas. La práctica fue sin embargo más allá de la propia Constitución; resultando ésta, de hecho, limitadora de los amplísimos derechos «heredados» de las Leyes de Indias, la costumbre antigua logró prevalecer: como indica Pedro J. Frías, «los eclesiásticos siguieron presentando al pase documentos que no lo exigían, los gobiernos de provincia intervinieron hasta fines del siglo pasado en la provisión de curatos, el juramento de los obispos les obligaba a no aceptar otra dignidad sin expreso consentimiento del gobierno nacional».

De hecho, el sistema constitucional, entendido de manera lata, funcionó durante un siglo sin que se provocasen demasiados conflictos; los autores hablan de un *modus vivendi* en cuanto que la Santa Sede permitió el efectivo funcionamiento de una *praxis* regalista y unas normas constitucionales en cuya redacción no había intervenido de ningún modo.

Sin embargo, había de llegar un día en que se hiciese preciso establecer negociaciones con la Santa Sede para modificar esta situación en sí misma anómala. El Patronato, tal como tuvo vigencia en la Argentina hasta mediado el siglo XX, carecía de verdadero apoyo jurídico: «Las prerrogativas del Patronato —escribe Frías— no estaban definitivamente incorporadas al

Derecho Público argentino por tratarse de una materia intrínsecamente bilateral y no haber otorgado la Santa Sede su asentimiento». Las negociaciones se iniciaron y alcanzaron un primer resultado en 1957, con la firma el 28-VI de la Convención sobre el Vicariato Castrense. Seguidamente, Roma ofreció a la Argentina aceptar el sistema de prenotificación oficiosa para sustituir al derecho de presentación. Y si de momento el Gobierno no aceptó la propuesta, empezó pronto un camino que conduciría finalmente a la renuncia al patronato. Desde 1959, la sesión del Senado para confeccionar las ternas episcopales pasó a ser secreta, y los obispos comenzaron a prestar el juramento en privado desde el 30-XI-59. Igualmente se dulcificaron las fórmulas gubernamentales que figuraban en los nombramientos episcopales, pasando de frases como «Nómbrese...» y como dirigirse al Papa pidiéndole «confirmar la elección que he hecho», a decir «Se confirma el nombramiento...» y «He resuelto presentar a Su Santidad...» o «Solicítase de la Santa Sede Apostólica la designación canónica de...». Asimismo, se suprime el pase, y el 10-III-64 se suprime el juramento de los obispos.

Estas medidas, tomadas durante las presidencias de Aramburu, Frondizi, Guido e Illia, condujeron bajo este último mandatario a la negociación del Acuerdo entre la Santa Sede y la República Argentina; concluido éste, la deposición de Illia retrasó su firma y ratificación, que tuvieron lugar el 10-X-66 y el 28-I-67, siendo presidente el general Onganía. Este acuerdo, según Frías, «fue necesario, porque nunca fue posible el arreglo del patronato, como lo quiere la Constitución nacional. Y no fue posible porque... la Santa Sede no se allanaba al pase de los documentos de la Iglesia en los términos del inc. 9 del art. 86 de la Constitución. Era precisamente esta disposición constitucional la que obstaba a un concordato pleno sin reforma constitucional». En 1955 había escrito el mismo autor: «En el derecho legislado en el inciso 8 del artículo —presentación de obispos— cabe la posibilidad de una reglamentación legal que coordine los derechos inalienables de la Santa Sede a nombrar obispos con los del Senado a elaborar la terna y del Presidente de presentar un nombre al Papa. Esa reglamentación tendría por objeto alejar la posibilidad de un conflicto. En el pase legislado en el inciso 9 del artículo 86 lamentablemente no parece posible introducir por reglamentación las modalidades que hacían conciliable esa norma con los derechos de la Iglesia. La diferente conclusión con respecto al inciso anterior, resulta de que en aquél es viable una reglamentación del procedimiento y en éste, en cambio, no se impone una solución por vía de procedimiento, sino una limitación del alcance de la facultad concedida por la Constitución».

El tiempo cambió esta posibilidad apuntada en 1955, pues al pedir el Concilio Vaticano II la renuncia del privilegio de presentación a los Estados que lo poseyeran, la Argentina estimó procedente acordar una modificación del sistema patronal del art. 86 de la Constitución. Se cruzaron cartas entre el Presidente Illia

(24-IX-65) y el Papa (18-X-65), sobre la base de un proyecto de Acuerdo presentado por el Nuncio Mozzoni. Elaborado, a partir del proyecto, un texto por Mozzoni y por el ministro de Relaciones Exteriores y Culto (Zavala Ortiz), fue sometido a la Santa Sede en marzo de 1966. A partir de las modificaciones sugeridas entonces por Roma, Zavala entregó al Nuncio un nuevo proyecto el 5-V-66, y la Santa Sede volvió a retocar el texto y lo presentó al gobierno el 6-VI-66. La aceptación por el gobierno de este último borrador dejó ultimado el Acuerdo, cuya firma quedó prevista para el 30-VI. Depuesto Illia por un movimiento militar, hubo de aplazarse la firma, efectuada el 10-X-66 por el Nuncio Mozzoni y el nuevo Ministro Costa Méndez, y ratificada por la Argentina el 23-XI-66 y por la Santa Sede el 8-XII, intercambiándose los instrumentos de ratificación entre el Secretario de Estado Cicognani y el embajador Frías el 28-I-67. A partir de este día entró en vigor el Acuerdo. En su alocución al Sacro Colegio del 23-XII-66, Paulo VI señaló que «el Acuerdo de Buenos Aires es el primer fruto, en el campo de las relaciones entre la Iglesia y el Estado, del Concilio Ecueménico Vaticano II».

El acuerdo es breve, integrándolo un preámbulo y siete artículos. Frías comenta pormenorizadamente tanto aquel como éstos. El artículo I garantiza a la Iglesia el ejercicio de su poder espiritual y del culto, así como de su jurisdicción en el ámbito de su competencia; el II regula las erecciones y modificaciones de las circunscripciones eclesiásticas; el III se ocupa del nombramiento de Obispos y establece un sistema de prenotificación; el IV garantiza la libre comunicación de las autoridades eclesiásticas con los fieles; el V autoriza la llamada al país de órdenes religiosas y clero secular por parte de la jerarquía; el VI prevee conversaciones para caso de interpretación y aplicación controvertida del Acuerdo, y en particular de sus artículos segundo y tercero; y el VII contiene una cláusula sobre la entrada en vigor del tratado.

Los siguientes capítulos de la obra de Frías se apartan del tema central del volumen, continuando lo va indicado de que éste recoge materiales de diversa procedencia. El capítulo o apartado V aparece destinado a «La hipótesis de reconocimiento de efectos civiles al matrimonio religioso» y contiene un estudio teórico del tema y un análisis de Derecho comparado sobre el mismo. Tal materia, ajena al Acuerdo, aparece un tanto fuera de lugar aquí situada, pues interrumpe la relación del capítulo IV —descripción y comentario del Acuerdo— con el VI, que se destina al análisis de las modificaciones que deberían efectuarse en la Constitución argentina para ponerlas en conformidad con lo establecido en el Acuerdo de 10-X-66. Y otra vez se aparta el autor del tema central en el capítulo VII, que constituye un breve estudio de las relaciones pactadas entre la Santa Sede y diversos países después del Concilio Vaticano II (Yugoeslavia, Argentina, Colombia y Portugal).

Finalmente, en el capítulo VIII aparece una relación

de Concordatos y Acuerdos vigentes con la referencia al **Acta Apostolicae Sedis** en que se encuentran, y en el IX una «Bibliografía argentina sobre las relaciones del Estado y la Iglesia Católica».

Aunque sucinto y poco homogéneo, el volumen del Dr. Frías posee un notable valor, tanto por la abundancia de información que aporta como por los interesantes juicios que hace acerca de los puntos controvertidos de mayor interés para el jurista.

ALBERTO DE LA HERA

La revisione del Concordato nelle discussioni parlamentari, I, Camera dei deputati. Sedute del 4-5 ottobre 1967 (IV legislatura), del 24 marzo 1969 e del 7 aprile 1971 (V legislatura). A cura di PIO CIPROTTI e ANNA TALAMANCA, 1 vol. de 379 págs. Ed. Giuffrè, Milano, 1975.

Este volumen forma parte de la colección «Testi per esercitazioni», de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Camerino. Pío Ciprotti y Anna Talamanca reproducen en él, de las Actas Parlamentarias, las discusiones de la Cámara de Diputados italiana sobre la revisión del Concordato de 1929, que tuvieron lugar los días 4 y 5 de octubre de 1967, 24 de marzo de 1969 y 7 de abril de 1971.

Cierran el libro un índice alfabético de los diputados que intervinieron en estas discusiones y otro de las disposiciones de los Pactos Lateranenses aludidas en los debates.

El volumen se limita a acercar al lector el material de las Actas Parlamentarias, relativo a los debates sobre la revisión del Concordato. Su importancia radica, por tanto, en el interés de los textos reproducidos, sin duda grande, y no sólo para el lector italiano. La lectura de este volumen resultará muy instructivo, por ejemplo, a quien reflexione acerca del futuro próximo del Concordato español.

PEDRO LOMBARDIA

LIBERTAD RELIGIOSA

ELWYN A. SMITH, **Religious liberty in the United States**, 1 vol. de XIV + 386 págs. Fortress Press, Philadelphia, 1972.

Es esta la primera monografía publicada que estudia, con visión histórica, las relaciones entre la Iglesia y los Estados Unidos de América desde la perspectiva de la libertad religiosa. Smith, abogado constitucional e historiador de cuestiones religiosas, sabe aprovechar sus conocimientos legales así como su experiencia en la observación de los acontecimientos a la hora de